

Nota estratégica del CESLA, número 15



Universidad de **Nariño**

Luis Hernando Portillo Riascos

Universidad de Nariño

La reactivación del estadillo social en Colombia

San Juan de Pasto, 28 de mayo de 2021

Situación actual

Los episodios de protestas que se están viviendo actualmente en Colombia representan una nueva fase del estallido social que inició en este país en noviembre de 2019 (ver documento de CESLA: 26/02/2020 - [El trasfondo de las protestas en Colombia](#)). De hecho, muchos de los reclamos ciudadanos que se presentaron en aquel momento aparecen nuevamente en el contexto de las manifestaciones de 2021. Es más, la agitación social que está ocurriendo actualmente en este país se puede interpretar como una respuesta a la falta de soluciones del gobierno de turno frente a las demandas represadas de distintos grupos de la sociedad, las cuales se han agudizado drásticamente en el marco de la pandemia por COVID-19.

Para explicar el estallido social que está ocurriendo en Colombia, es necesario advertir que el mismo está relacionado con distintos aspectos, algunos coyunturales y otros estructurales, conectados por varias dimensiones (económica, política, social, institucional, etc.). La novedad de este nuevo escenario tiene que ver con la dimensión de las movilizaciones y su duración.

Los actores que confluyen a las protestas son diversos¹, así como sus reclamos. Además, a diferencia de otras manifestaciones en las cuales las reivindicaciones se hacían desde algún grupo en particular (estudiantes, indígenas, campesinos, transportadores, etc.), en esta ocasión los puntos de discusión tienen una perspectiva más general.

Los elementos descritos dejan entrever un escenario bastante complejo de negociación con el Gobierno Nacional, el cual no ha mostrado, hasta el momento, una disposición a facilitar un espacio amplio de discusión. Las protestas iniciaron el 28 de abril de 2021, con grandes repercusiones políticas, sociales y económicas, sin que hasta el momento se vislumbre una salida.

El escenario de protestas se caracteriza por una gran participación ciudadana, la parálisis de la economía por los bloqueos en las carreteras, un ambiente de zozobra, temor y anarquía al interior de la sociedad y un Gobierno que se muestra incapaz de ofrecer alternativas de solución.

La dimensión que han adquirido las protestas augura cambios importantes en el país. No obstante, el alcance final de los mismos todavía no es claro. El próximo año se realizarán las elecciones tanto para la presidencia como para el congreso. Desde luego, se esperaría que las aspiraciones de los manifestantes se reflejen en el escenario político. Para los partidos tradicionales, este es un riesgo inminente en este momento. Por tal motivo, la salida a la crisis deberá incorporar dichos aspectos.

¿Qué ha ocurrido en Colombia desde el 28 de abril de 2021?

El 28 de abril de 2021 se dio inicio a un nuevo episodio de protestas en Colombia. La convocatoria fue realizada por el Comité Nacional del Paro, que está conformado por más de sesenta organizaciones sociales. El detonante de las manifestaciones fue el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Sin embargo, hay otros aspectos que también se incluyeron dentro de las peticiones realizadas por parte de las organizaciones, sin contar con los diversos temas que se han ido agregando en la medida que han transcurrido las manifestaciones.

Las peticiones iniciales del Comité Nacional del Paro se resumen en [ocho puntos](#): a) el retiro de los proyectos de reforma tributaria y reforma a la salud, b) la vacunación masiva contra la COVID-19, c) una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual (246 dólares, aproximadamente), d) defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), incluyendo subsidios a las pequeñas empresas, e) matrícula cero para las instituciones públicas de educación superior y negativa al retorno a clases

¹ Estudiantes universitarios, profesores, profesionales de la salud, sindicatos, campesinos, artistas, indígenas, activistas de derechos humanos, defensores del medio ambiente, animalistas, y grupos significativos de la sociedad civil en general, y particularmente los jóvenes.

presenciales en las instituciones públicas de educación bajo la modalidad de alternancia, f) rechazo a la discriminación de género, diversidad sexual y étnica, g) negativa a las iniciativas de privatización y la derogatoria del decreto 1174 de 2020², y h) detener las erradicaciones forzadas de los cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato.

Las manifestaciones realizadas hasta el momento han sido mayormente pacíficas, con gran diversidad en cuanto a los actores y sus expresiones, caracterizadas por una inmensa participación ciudadana, a pesar de la gravedad de la Pandemia, y que han ido tomando mayor fuerza a medida que pasan los días. Desde luego, se han presentado hechos de vandalismo, totalmente repudiables, pero hay consenso en que los mismos no representan el carácter general de las protestas, además de que no se ha esclarecido la autoría de estos hechos.

Por otra parte, se resalta el carácter descentralizado de las protestas. Así, mientras en 2019 el epicentro de las manifestaciones fue Bogotá, en esta ocasión el escenario se ha trasladado a ciudades intermedias de gran importancia como Cali, Medellín, Bucaramanga o Pereira. En este escenario, muchas de las organizaciones optaron por el bloqueo de las carreteras intermunicipales e interdepartamentales (incluso al interior de las ciudades), lo cual ha dificultado enormemente la provisión de bienes, medicamentos, combustibles, etc.

Las manifestaciones realizadas hasta el momento han conseguido parte de los propósitos que inicialmente se fijaron, lo cual, paradójicamente, se ha convertido en un aliciente para la continuidad de las mismas. En este punto, se destaca el retiro del proyecto de reforma tributaria, el archivo del proyecto de reforma a la salud por parte del Congreso, el anuncio de la gratuidad en la educación superior, por lo menos por un semestre, y el programa de incentivo al empleo juvenil.

La respuesta del Gobierno Nacional frente a la dimensión de las manifestaciones ha sido errada. En primer lugar, ha utilizado a la fuerza pública para tratar de disuadir a los manifestantes, con un nivel de represión que no tiene parangón; desconociendo así el carácter político de la protesta ciudadana. Y a pesar de los llamados de los protestantes a respetar el derecho constitucional a manifestarse, los actos de violencia no han cesado.

En segundo lugar, el Gobierno Nacional tampoco ha sido capaz de tomar medidas ante los incuestionables atropellos tanto de la Policía como del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el marco de las manifestaciones. Llama la atención este aspecto, teniendo en cuenta los antecedentes trágicos que se han presentado en otras protestas. Este mensaje, desde luego, resulta negativo, porque es sinónimo de

² A través del cual se toman algunas decisiones en materia laboral.

impunidad frente a los actos cometidos por muchos de los integrantes de la fuerza pública.

En tercer lugar, debido a la escasa capacidad de liderazgo y credibilidad del presidente, Iván Duque, la interlocución con los manifestantes ha sido muy lenta y tardía; algo que se refleja en que, luego de un mes desde el inicio de las protestas, no se ha instalado la mesa de negociación.

¿Cuáles con las causas de las protestas?

Al igual que en el escenario de manifestaciones del año 2019, las protestas que actualmente están ocurriendo en Colombia se forjaron alrededor de algunos referentes, como la reforma tributaria o la de la salud, pero no están estructuradas en torno a unos ejes puntuales. Incluso, es posible afirmar que varios de los temas que se pretenden poner sobre la mesa de discusión vienen surgiendo de manera espontánea. Esto no quiere decir que las reclamaciones no sean justas, sino que, por una parte, no hay una agenda delimitada, y por otra, hay una mezcla entre aspectos coyunturales y otros de naturaleza estructural, que se han incorporado en la medida que el contexto lo ha ido propiciando.

A continuación, se esgrimen algunas de las razones que explican los orígenes de las manifestaciones, así como las dimensiones que ha tomado este fenómeno en el país.

El contexto social

Las protestas iniciadas en el mes de abril se enmarcan en una crisis social profunda. En primer lugar, al igual que la mayoría de los países en el mundo, Colombia viene padeciendo los efectos perversos de la pandemia por COVID-19. Al 26 de mayo de 2021, este país ha acumulado alrededor de 86.000 decesos y más de 3,3 millones de personas contagiadas (6,4% del total de la población). Actualmente, Colombia está afrontando el tercer pico de la Pandemia, ubicándose en el segundo lugar en América Latina por el número de nuevos contagios y muertes. Ahora bien, lo llamativo en este punto es que, a pesar de la gravedad de la pandemia, los ciudadanos han salido a protestar masivamente.

A pesar del discurso oficial, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno ha sido deficiente. Temas como las carencias del sistema de salud y la falta de una respuesta contundente ante los efectos perversos de la pandemia, entre otros, han aparecido en las críticas expresadas por diferentes sectores de la sociedad. Además, el proceso de vacunación ha sido lento y tardío. Hasta el día 25 de mayo se vacunaron 5,4 millones de personas con al menos una dosis (10% del total de la población), lo cual deja grandes dudas frente a las promesas del Gobierno de alcanzar el 70% de la población (35 millones) para el final de año. Tomando el indicador de dosis por cada cien habitantes, Colombia está lejos de las cifras reportadas por otros países

sudamericanos como Chile o Uruguay, y solamente supera a Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En segundo lugar, hay evidencias del recrudecimiento de la violencia. Como consecuencia de este fenómeno, el desplazamiento (interno) forzado no ha parado, entendiéndose que el mismo está asociado básicamente a los hechos de violencia generados por distintos grupos armados ilegales que operan en este país, relacionados en la mayoría de los casos con el narcotráfico. Dicho fenómeno resulta además paradójico en el contexto de las restricciones a la movilidad impuestas en el marco de la pandemia. De acuerdo con el [Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos \(IDMC\)](#), del Consejo Noruego para los Refugiados, al final de 2020, [Colombia acumuló 4,9 millones de desplazados internos](#), cifra que superan únicamente Siria y la República Democrática del Congo. Del total, 106 mil corresponden a casos nuevos, lo que representa el 44,5% del continente americano.

De acuerdo con la información publicada por [INDEPAZ](#), desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, hasta el 15 de diciembre de 2020, 1.091 personas líderes y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de las cuales 695 (63,7%) casos ocurrieron durante el gobierno de Duque; y solamente en el año 2020 la cifra alcanzó las 220 personas, que es el número más alto que se ha alcanzado desde 2018 (295). Por sectores sociales, los más golpeados han sido los indígenas y los campesinos. En el mismo informe se indica que en 2020 ocurrieron 85 masacres que han dejado 357 víctimas mortales³. Además, según la [Defensoría del Pueblo](#), entre enero y marzo de 2021, 34 líderes sociales han sido asesinados y 123 amenazados.

En tercer lugar, un fenómeno que confluye con la Pandemia es la agudización de la pobreza y la desigualdad. Según las cifras publicadas por el DANE, al finalizar el 2020, la pobreza monetaria se ubicó en el 42,5% (21 millones de personas), con un crecimiento de 6,8 puntos porcentuales con relación a 2019. Entretanto, la pobreza extrema pasó del 9,6% en 2019 al 15,1% en 2020 (7,5 millones de personas). Del mismo modo, se ha dado un crecimiento de la desigualdad; en un país con unos niveles de inequidad en la distribución del ingreso bastante elevados.

En cuarto lugar, se observa un crecimiento notable del desempleo, variable que alcanzó el 15,9% al finalizar el año 2020. Dicho resultado creció 5,4 puntos porcentuales con relación al porcentaje alcanzado al 31 de diciembre de 2019. Además, se resalta que las cifras todavía son peores para la población joven (23,5%). Finalmente, se ha incrementado la precariedad laboral, reflejada en un nivel de informalidad del 49% para el trimestre enero-marzo de 2021, es decir,

³ Dicho resultado solamente es comparable con lo ocurrido en 2005.

3 puntos porcentuales por encima del porcentaje reportado en el año inmediatamente anterior.

El contexto político

Iván Duque se ha caracterizado desde el inicio de su mandato, en 2018, por altos niveles de desaprobación ciudadana. Dicha calificación se mantuvo por encima del 50% desde finales de 2018, y solamente mejoró en la fase inicial de la pandemia por COVID-19. En abril de 2021, justamente antes del inicio del nuevo episodio de estallido social, [la desaprobación se ubicó en el 63,2%](#).

Una de las mayores dificultades que ha tenido que afrontar el mandatario actual es la falta de gobernabilidad, dados los inconvenientes para consolidar las mayorías en el Congreso de la República. Así, a pesar de haber realizado diversas concesiones para facilitar la participación de otros partidos políticos en el Gobierno, ha tenido varios contratiempos para la aprobación de sus principales iniciativas legislativas. La situación ha llegado a tal punto que incluso desde el interior del partido político del cual hace parte se han realizado críticas a su gestión, reclamando decisiones más radicales en temas como la defensa nacional, la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico, entre otros.

El escenario descrito anteriormente debe enmarcarse en el contexto de polarización política que vive Colombia en los últimos años. En primer lugar, vale recordar el escenario bajo el cual se terminó refrendado el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. El rol que jugó el partido político del actual presidente, el Centro Democrático, fue crucial, mostrándose en desacuerdo con dicha iniciativa. Hasta el momento, esta postura no ha cambiado.

En segundo lugar, Iván Duque llegó a la presidencia tras ganar las elecciones realizadas en 2018, con un porcentaje del 53,98%, mientras su contendiente, Gustavo Petro, alcanzó el 41,83%. Este escenario ya reflejaba una división política entre los votantes, algo que nunca aceptó el mandatario actual, quien decidió gobernar básicamente con las personas cercanas al partido al cual pertenece.

El nivel de rechazo a la gestión de Duque, que se puede extender a los partidos políticos tradicionales, se puede ver en los resultados de las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022. A un año de las elecciones, Gustavo Petro, líder de la oposición, lidera ampliamente las encuestas, con [un 25% del total](#). Los resultados descritos se recogieron en el marco de las protestas que se han venido presentando desde el 28 de abril, y muestran claramente que la intención de voto de Gustavo Petro está en ascenso; [mientras que la del resto de candidatos se ha reducido](#). Estas cifras, desde luego, continúan debilitando la posición del Gobierno en el plano político.

En tercer lugar, la desaprobación de la gestión del presidente Duque también está relacionada con su falta de compromiso con la

implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016. Temas como la restitución de tierras⁴ y el desarrollo integral del sector agrario no muestran mayores avances. Además, las zonas con cultivos de uso ilícito constantemente han estado amenazadas con la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. Dicha postura, sin lugar a duda, ha contribuido al recrudecimiento de la violencia en varias zonas del país.

Los pocos avances en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 han ocasionado un incremento de la persecución hacia los líderes sociales y desmovilizados, especialmente en aquellas zonas estratégicas para el narcotráfico, como la costa pacífica y la frontera con Venezuela, en las cuales es evidente la falta de presencia institucional del Estado; que tampoco ha ofrecido resultados importantes para esclarecer los hechos violentos ocurridos en contra de esta población.

Por último, uno de los factores que ha debilitado la posición política de Duque es la manera cómo se ha cooptado a los órganos de control (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría), los cuales quedaron liderados por personas cercanas al presidente o a los partidos políticos que apoyan a su gobierno. Este marco institucional no permite garantizar un funcionamiento imparcial de estas entidades, en el cual se garantice el cumplimiento cabal de sus funciones. Además, este temor ciudadano se ha hecho realidad en el marco de las protestas.

El contexto económico

El impacto económico causado por la pandemia por COVID-19 ha sido muy fuerte para Colombia, sin desconocer que esta economía venía creciendo a unas tasas muy discretas desde el final del *boom* de las *commodities* en 2014. Al finalizar el 2020, Colombia reportó un crecimiento del PIB del -6,8%, que representa la contracción económica más fuerte en la historia reciente de este país.

La contracción de la economía colombiana, aunada al crecimiento del gasto público demandado para atender requerimientos de la pandemia, ha causado un desajuste sustancial en las finanzas públicas. El déficit del Gobierno Nacional Central al finalizar el 2020 alcanzó el 7,8% del PIB, y se prevé que para 2021 dicho indicador sea del -8,6%. El crecimiento del déficit ha llevado a un incremento significativo de la deuda pública, que pasó del 50,3% del PIB en 2019 al 64,8% del PIB en 2020, es decir un incremento de 14,5 puntos porcentuales. Para 2021, se prevé que la deuda pública siga creciendo, hasta alcanzar el 65% del PIB.

Ante los temores por el crecimiento de la deuda pública, el Gobierno Nacional optó por tramitar una reforma tributaria, la cual, en principio, aspiraba a recaudar aproximadamente 24 billones de pesos (2,4% del PIB). Dicha iniciativa se justificó, entre otras cosas, por la necesidad

⁴ Hasta la fecha, solamente se han adjudicado 30.318 hectáreas (1%) de los tres millones que se comprometieron hasta 2027.

de asegurar el financiamiento de los programas sociales estructurados en el marco de la pandemia. En contraste, muchos ciudadanos interpretaron esta iniciativa como un intento de garantizar el pago de la deuda pública, enviando así un mensaje de “tranquilidad” a las agencias calificadoras de riesgo

El principal rechazo de los manifestantes frente al proyecto de reforma tributaria fue la ampliación de la base del impuesto de renta para personas naturales y el IVA. Además, se criticaron las exenciones otorgadas a las empresas en la reforma tributaria aprobada en 2019. Pero más allá de estas objeciones, otra medida que generó indignación en la ciudadanía fue el anuncio del inicio de los trámites para la compra de aviones de guerra, cuyo costo ascendía a 3.600 millones de dólares aproximadamente. Esta iniciativa resultaba por demás contradictoria en un escenario de desajuste fiscal. Finalmente, dicha propuesta fue desestimada.

Como resultado del retiro del proyecto de reforma tributaria por parte del Gobierno, la calificadora Standard & Poor´s decidió rebajar la nota del país, que pasó de BBB- a BB+ con perspectiva estable, lo que supone la pérdida del grado de inversión. Desde luego, esta situación representa un traspié importante para el Gobierno, dado el incremento del costo del endeudamiento y las dificultades que puede suponer para el financiamiento externo del país.

La respuesta del gobierno

La postura que asumió el Gobierno Nacional para afrontar las protestas, desde el inicio, fue errada. En primer lugar, inicio buscando culpables externos. En su momento, se afirmó que detrás de las marchas estaban algunos de los grupos delincuenciales, como el ELN o las disidencias de las extintas FARC. También se mencionó la participación de los partidos políticos de la oposición, destacando el rol del precandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro. En la misma línea, se acusó al gobierno de Venezuela de estar incitando y financiando las manifestaciones. Tal y como ocurrió en 2019, dicha postura resultó contraproducente.

En segundo lugar, el Gobierno de Duque ha venido reaccionando a las protestas de una manera hostil. Así, en vez de buscar una salida negociada ante los reclamos de los manifestantes, su principal respuesta fue la represión, persecución, estigmatización y posterior judicialización de estos. Desde luego, dicha posición ha reforzado la indignación ciudadana, pero además ha dificultado el inicio de las negociaciones, en la medida en que resulta evidente que hay una falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta.

Los datos que deja la protesta hasta el momento, tanto en términos sociales como económicos, son nefastos. En el primer caso, las cifras son aterradoras, y la lectura no puede ser otra que una violación flagrante de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional y la fuerza pública.

Aclarando que hay discrepancias entre los reportes divulgados por las diferentes instituciones, la [ONG Temblores e Indepaz](#) dan cuenta que, entre el 28 de abril y el 26 de mayo de 2021, se registraron al menos 3.155 casos de violencia policial, 60 asesinatos⁵, de los cuales 43 habrían sido cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública⁶. Además, nueve de las víctimas eran líderes y defensores de derechos humanos, y dos fueron firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC. Por otra parte, el informe relaciona 22 víctimas de violencia sexual y 46 personas heridas en los ojos.

En términos económicos, desde luego, los resultados también son negativos. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Nacional, al 24 de mayo, el costo generado por los bloqueos de las carreteras y las manifestaciones habría ascendido al 1% del PIB aproximadamente.

En el plano político, Duque optó por retirar el texto de la reforma tributaria. Asimismo, lanzó una iniciativa para garantizar la gratuidad en la matrícula en la educación superior pública. Además, anunció la creación de un proyecto para fomentar el empleo de la población juvenil.

Ahora bien, a pesar de las pequeñas concesiones otorgadas por el Gobierno, las mismas no han sido suficientes para calmar la agitación social. Dicha situación se explica, en primer lugar, porque el presidente Duque no ha tenido la disposición ni la capacidad para entablar un diálogo sensato con los miembros de las organizaciones que están detrás del paro. La evidencia está en que, luego de un mes de manifestaciones, todavía no se han iniciado los diálogos formales.

En segundo lugar, porque la represión de la fuerza pública no ha cesado, sin que haya ningún pronunciamiento oficial para tratar de desescalar la violencia de las jornadas de protesta. Dicha posición se ha mantenido a pesar de las peticiones realizadas por varias organizaciones internacionales, quienes han solicitado la instalación de una misión de verificación. La respuesta tanto para la Organización de Estados Americanos (OEA) como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido negativa.

En tercer lugar, quienes protestan no confían en el Gobierno, dada la mala experiencia de la llamada Gran Conversación Nacional instalada en 2019; y muchas de las promesas incumplidas a diferentes grupos sociales tanto por parte del gobierno actual como por los anteriores.

En cuarto lugar, los manifestantes están desorganizados. Como consecuencia, al haber diversos actores que están participando en las manifestaciones, existen dudas sobre el nivel de representatividad de las personas que están liderando las negociaciones con el Gobierno

⁵ El reporte señala que 29 de las víctimas se ubicaron en Cali.

⁶ Human Rights Watch, al 25 de mayo de 2021, reportó 61 denuncias de asesinatos relacionados con las protestas, incluidas las de dos policías. De estos casos, 24 ya están confirmados.
https://caracol.com.co/programa/2021/05/25/6am_hoy_por_hoy/1621951034_267111.html

Nacional; algo que puede afectar la legitimidad del proceso. Por otra parte, no hay un pliego de peticiones totalmente estructurado. Los elementos citados son entendibles en la medida en que hay muchas personas y organizaciones que están participando en las manifestaciones. Además, las mismas están descentralizadas, lo que implica que las decisiones que se toman no obedecen a las directrices generales del Comité Nacional del Paro. Desde luego, dicha situación afecta la celeridad que pueda tomar la negociación.

Perspectivas

Hasta el momento, no se vislumbra una salida clara frente al estallido social que está dando en Colombia. Tampoco está definido el tiempo que tardará este proceso. Hay dos problemas que terminan dificultando la negociación: la falta de legitimidad institucional, en el entendido de que no hay garantías para el derecho a la protesta, y la ausencia de liderazgo que facilite la interlocución. Así, en medio de la desconfianza y las hostilidades, resulta difícil pensar en un acuerdo rápido entre las partes.

Teniendo en cuenta el contexto político, se espera que muchos de los reclamos se resuelvan en el marco de las elecciones, tanto para el Congreso de la República como para la presidencia, que están programadas para 2022. No obstante, hay consenso en que las dimensiones de las protestas son de la mayor gravedad y, por tanto, debe haber una salida pronta. Más allá de estas aclaraciones, los escenarios que se han planteado son diversos.

El primer escenario consiste en la **redacción de una nueva constitución política**; tomando como referencia lo que viene sucediendo en Chile, e incluso lo que se dio en Colombia al finalizar la década de los ochenta. En contraste con esta posición, lo que se argumenta es que el problema no está en la Constitución actual, sino en su aplicación. Además, hay cierto temor en este mecanismo, por la posibilidad de que los partidos tradicionales se queden con las mayorías en una potencial asamblea constituyente. Desde una perspectiva democrática, este argumento es contradictorio, porque la misma sociedad está desconfiando de su capacidad para imponerse en un proceso electoral.

Un segundo escenario, liderado por el Gobierno Nacional, consiste en **dilatar las negociaciones, apostando al desgaste de las organizaciones que están detrás de las manifestaciones**. Ante la gravedad de las afectaciones económicas y sociales, un fenómeno que puede ocurrir es el de la división de los manifestantes, especialmente por los reclamos provenientes de los sectores mayormente afectados. En este escenario, por ejemplo, es muy compleja la situación del sector agropecuario, el cual viene sufriendo cuantiosas pérdidas por las dificultades para movilizar los productos, así como para el abastecimiento de las materias primas. La ciudadanía también se muestra muy inconforme por los problemas para el acceso a los insumos básicos, como alimentos, medicamentos, combustibles, etc.

Así entonces, podría darse un rechazo ciudadano hacia los mismos manifestantes.

Una tercera apuesta consiste en la **desilusión con las movilizaciones**. Es claro que las aspiraciones tanto de los manifestantes como del resto de ciudadanos son muy grandes, pero no en todos los casos estos procesos han logrado resultados positivos. El Gobierno puede contribuir a alimentar este escenario, arguyendo el poco margen de maniobra fiscal con el que cuenta para atender los reclamos ciudadanos, bajo la excusa del elevado nivel de endeudamiento público y el crecimiento del déficit fiscal. Más allá de este punto, el desencanto también puede estar en el terreno político. Si la ciudadanía no es capaz de expresarse en las elecciones nacionales del próximo año, las riendas del país quedarán nuevamente en manos de los partidos tradicionales que tanto se han criticado.

El cuarto escenario, también liderado por el Gobierno Nacional, consiste en **tratar de desactivar las movilizaciones sociales a través de una mezcla de pequeñas concesiones y promesas**, que finalmente no se van a cumplir. Dicha estrategia estaría aunada a una mayor represión de las manifestaciones por parte de la fuerza pública. El problema es que, en la medida en que la espiral de violencia sigue creciendo, la salida autoritaria se puede imponer dentro de las opciones; algo que sería nefasto para el país.

El último escenario **es un cambio político en el país, el cual debería consumarse en las elecciones de 2022**. En este momento hay posibilidades reales de que un partido de izquierda o de centro llegue a ocupar el poder. Ahora bien, a pesar de que esta salida tiene sentido, el problema es el tiempo. Dicho escenario podría llevar al país a un entorno de manifestaciones intermitentes, las cuales contribuirían a profundizar la incertidumbre que actualmente se está viviendo. Además, pueden generarse episodios de violencia de mayor dimensión, que incluso derivarían en la agudización de los conflictos vigentes en el país; algo que reforzaría el argumento de los partidos de derecha para imponer su agenda.

Conclusiones

Las manifestaciones que se vienen dando en Colombia desde el 28 de abril representan un hecho fundamental para este país. El estallido social que se está dando no es accidental. Antes bien, responde a unas reivindicaciones que han estado represadas durante mucho tiempo. Muchas organizaciones sociales, y especialmente los jóvenes, han decidido levantar su voz de protesta frente a diversos temas en los cuales consideran que no han tenido la posibilidad de ser escuchados. También expresan su hartazgo con los partidos políticos tradicionales, los constantes hechos de corrupción, la violencia, independientemente de su procedencia, y la falta de empatía de los gobiernos con la realidad que están viviendo los territorios. Además, se ven agobiados por la falta de oportunidades para acceder al sistema educativo, para

conseguir empleo, y en general por la desilusión frente a un futuro que no es promisorio.

La posición que ha asumido el Gobierno Nacional frente a las manifestaciones no ha estado a la altura de las reclamaciones ciudadanas. Dicha descontextualización ha llevado a una respuesta violenta por parte de la fuerza pública, que ha significado la muerte de muchas personas, además de los miles de lesionados.

En medio del rechazo a la postura del Gobierno, fundamentalmente por su falta de legitimidad y liderazgo, la interlocución con los líderes de la protesta ha sido lenta y tardía. Dicho escenario implica la persistencia de las manifestaciones y las medidas de hecho, especialmente los bloqueos viales; los cuales tienen subsumido al país en un escenario complejo, con unos costos sociales y económicos demasiado altos.

Las salidas frente a la crisis no están claras. Además, se plantean escenarios antagónicos. Por un lado, hay quienes defienden la idea de construir un nuevo pacto social que permita cerrar las brechas entre los distintos grupos de la sociedad, que a la vez empodere a las organizaciones, y especialmente a los jóvenes, para que hagan parte de las decisiones trascendentales del país. Para este propósito, uno de los insumos más importantes es el Acuerdo de Paz que se firmó con las FARC en 2016, el cual tiene grandes rezagos en la implementación.

El segundo escenario consiste en la prolongación del panorama actual, en el entendido de que no se llegue a consensos amplios frente a las peticiones presentadas por los líderes de las manifestaciones. En este contexto, es posible que las protestas continúen, lo cual desencadenaría en una mayor polarización y desarticulación social. Dicho escenario conllevaría al incremento de la violencia, que a su vez puede derivar en el debilitamiento de la democracia.

Los dos escenarios son plausibles. Sin embargo, la aspiración es que prevalezca el primero. Para este propósito, se requiere, en el corto plazo, de una disposición real de las dos partes, y particularmente del Gobierno, para negociar. Además, es imperativo el desescalamiento de la violencia, una investigación rigurosa e imparcial sobre los abusos de la fuerza pública y los hechos de vandalismo, el desmonte de los bloqueos viales, pero sobre todo de un acto de reconciliación que permita abrir espacios reales de diálogo; asegurándose, desde luego, de garantizar la participación efectiva de los distintos grupos que han estado participando en las manifestaciones. En este espacio, también deben concurrir otros actores para darle legitimidad al proceso, como los empresarios, las organizaciones civiles, la academia, etc. En el mediano plazo, la salida es política, y pasa por las elecciones de 2022.

Las opiniones vertidas en este informe son responsabilidad del equipo técnico que elabora el informe y no representan a las instituciones individuales que integran el Círculo de Estudios Latinoamericanos –CESLA–.